JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO. Barranquilla, veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

1. Identificación del proceso, partes y número de radicación.

Ref. Auto interlocutorio. Proceso: Ejecutivo. Dte. Inversiones Pinky y Cerebro S.A.S. Ddo. Colombiagol S.A.S. Rad. 080013153015 – 2023 – 00087 – 00

2. Asunto a resolver.

Procede el juzgado a resolver el recurso de reposición presentado por el extremo ejecutado, en contra del auto del 16 de mayo de 2023, mediante el cual se dictó mandamiento de pago en favor del ejecutante.

3. Fundamentos del recurso.

Examinado el escrito contentivo del recurso, tres son las censuras que propone el ejecutado para solicitar la revocatoria del auto de apremio; la primera fundada en la excepción previa contenida en el numeral 2º del artículo 100 del C. G. del P.; la segunda acusa la falta de claridad del título valor y la tercera, que la digitalización del título valor no corresponde a la del original.

4. Consideraciones.

Encontrándonos frente a un proceso ejecutivo, es menester destacar que de conformidad con los artículos 430 y 442 del C. G. del P., a través del recurso de reposición podrán discutirse los requisitos formales del título, el beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas.

Siguiendo la doctrina normativa, invoca el recurrente la configuración de la excepción previa enlistada en el numeral 2º del artículo 100 ritual civil, denominada <<compromiso o cláusula compromisoria>>.

A efectos de resolver la primera de las inconformidades planteadas por la demandada, lo primero que se advierte es que en nuestro país no existe disposición que faculte a los árbitros a conocer de procesos de ejecución, por ello, siempre que se pretenda el recaudo o cumplimiento efectivo de las obligaciones incorporadas a

un título valor o título ejecutivo, deberá acudir a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.

Y es que no puede soslayarse que cuando se acude al procedimiento ejecutivo, se parte de la existencia de derechos ciertos y, en principio, indiscutibles; de tal suerte que la intervención de un tribunal de arbitramento resultaría inútil, por cuanto su conformación y funcionalidad estaría supeditada a la definición de derechos en litigio, lo cual escapa a la órbita de la ejecución, donde – reiteramos – se parte de un derecho no disputado e insatisfecho.

Adicionalmente, la potestad coercitiva del estado para imponer el pago forzado de las obligaciones contenidas en los títulos, está reservada a los jueces y no a los árbitros, pues, si en gracia de discusión así se admitiera, pudieran ser ejecutores de los laudos que emiten.

Nótese que en esta misma línea, el inciso 5° del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, dispone que *<<de la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria o la contenciosa administrativa, según el caso>>*; luego sostener que al haberse pactado *<compromiso o cláusula compromisoria>* el cumplimiento de las obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en documentos que provengan del deudor y constituyan plena prueba en su contra, debe promoverse ante árbitros, es asunto sobre el cual el legislador no le ha establecido competencia y va en contra de las funciones y naturaleza de la función arbitral.

Adicionalmente no podemos perder de vista que, al sustentarse la ejecución en título valor que se ajusta a las previsiones generales y especiales exigidas por la ley mercantil, no requiere autenticación de firma ni el acompañamiento de ningún documento adicional para el inicio del procedimiento ejecutivo.

La sola circunstancia de acompañarse el documento que preste mérito ejecutivo, relega cualquier posibilidad de intervención arbitral, dado que encontrándose los derechos previamente declarados e insatisfechos, ninguna controversia distinta a su extinción, modificación o ejecución es admisible proponer; ya que por disposición legal, los árbitros se envisten de jurisdicción para resolver en derecho, equidad o de manera técnica un asunto que resulta ser incierto y discutido; calidades que desde el inicio de la ejecución ya vienen definidas.

No desconoce esta instancia judicial que en la doctrina y la jurisprudencia se han expuesto posturas que no son coincidentes; así por ejemplo, la Corte

Constitucional, siguiendo la línea establecida por la Sala Civil de la CSJ, en sentencia T-057 de 1995, consideró la imposibilidad de que los árbitros conozcan de juicios ejecutivos porque no existe norma que así lo autorice y la paz y el orden público se ponen en peligro si le otorga a particulares la facultad de disponer del poder coactivo.

No obstante lo anterior, en ese mismo año, en sentencia C-294 de 1995, indicó:

«En conclusión: los árbitros, habilitados por las partes, en los términos que determine la ley, pueden administrar justicia para decidir conflictos surgidos en torno a obligaciones exigibles ejecutivamente, así esté en trámite el proceso ejecutivo, o no haya comenzado aún. Así lo establece inequívocamente el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución.»

«Hay que recordar que corresponde al legislador, en virtud del mandato del artículo 29 de la Constitución, y especialmente de su inciso segundo, fijar las formas propias de cada juicio, es decir, las normas procesales, y señalar el juez o tribunal competente para cada clase de asuntos. Por consiguiente, si el legislador dispone que ante los árbitros habilitados por las partes en conflicto, se diriman asuntos propios del proceso de ejecución y establece las reglas de este proceso arbitral, en nada quebranta la Constitución.»

La CSJ, en sentencia STC del 17 de septiembre de 2013, conceptuó:

«Si bien se soportó en la cita extensa de providencias dictadas por la Corte Constitucional, en la que se indicó, en línea de principio, la posibilidad de surtir un proceso ejecutivo ante los tribunales de arbitramento, omitió analizar circunstancias relevantes, como aquella que la norma que en su momento le permitió a la alta corporación analizar el tema, artículo 2° del Decreto 2661 de 1991, no fue recogida por la Ley 446 de 1998 y menos por el Decreto 1818 de 1998, cuestión destacada, por lo demás, por el Consejo de Estado en fallo de 8 de julio de 2009, al decir: “en relación con el artículo 2° del Decreto 2651 de 1991, que la Ley 446 de 1998 no lo adoptó como legislación permanente (art. 162), razón por la cual desapareció del ordenamiento jurídico nacional...”, y de trascendencia, porque como lo indicó esa misma Corporación: “...así se admita la posibilidad de convocar tribunales de arbitramento para tramitar procesos ejecutivos, surgen dos obstáculos que deben ser superados para que aquellos puedan actuar válidamente en tal clase de procesos: 1. De un lado, es necesario que el legislador autorice y establezca el procedimiento a seguir

por parte de los árbitros, cuando se trata de cobros ejecutivos, puesto que el procedimiento que actualmente existe, corresponde a un proceso de conocimiento, declarativo y de condena, que obviamente no resulta adecuado para aquella finalidad. 2. De otro lado, es necesario que las partes expresamente hayan acordado en el pacto arbitral la posibilidad de someter al conocimiento de árbitros el cobro coactivo de obligaciones claras, expresas y exigibles, contenidas en títulos ejecutivos – en este caso, derivados de contratos estatales-, es decir, que de manera expresa y concreta incluyan en la cláusula compromisoria o en el compromiso, el acuerdo de tramitar los procesos ejecutivos que se puedan suscitar entre ellas, ante Tribunales de arbitramento y no ante la jurisdicción ordinaria...».

Conforme a la tesis de nuestro órgano de cierre, dos son las sub-reglas que deben tenerse en cuenta para tener por establecida la excepción previa de cláusula compromisoria; la primera hace referencia a que las partes expresamente determinen que la competencia de las acciones ejecutivas se atribuya a particulares investidos transitoriamente de jurisdicción, como es el caso de los árbitros; mientras que la segunda implica la existencia de un procedimiento previamente establecido por el legislador, ya que conforme al artículo 29 superior le corresponde a este fijar las formas propias de cada juicio.

Descendiendo al análisis del caso concreto, cierto es que ninguna manifestación expresa de las partes faculta a someter al conocimiento de tribunal de arbitramento aquellos asuntos en los que se reclame el cumplimiento o satisfacción de obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en títulos ejecutivos, circunstancia que imposibilita reconocer la prosperidad de la excepción previa.

Y es que, aun frente a la existencia de un pacto expreso que faculte a los árbitros a conocer de acciones ejecutivas, no se puede desconocer que frente a la ausencia de un procedimiento que establezca las formas y reglas que han de verificarse al interior del proceso arbitral, tampoco es posible admitir la censura y revocar el auto de apremio.

Pasando al segundo reparo que hace el recurrente, ha de tenerse en cuenta que la obligación cuyo recaudo se persigue aflora de manera nítida y transparente, al punto que ningún razonamiento mental o interpretación debe hacer esta autoridad judicial para establecer su cuantía y demás extremos que la componen.

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
Juzgado Quince Civil del Circuito

Es evidente que en el preformato del pagaré se inserta un año de vencimiento distinto al que propone el tenedor del título valor al rellenar los espacios en blanco, sin embargo, es asunto que resulta insustancial si tenemos en cuenta que sea cual fuere la anualidad que se tome en cuenta, el plazo para satisfacer la obligación se encuentra vencido y, por lo tanto, es exigible.

En este punto conviene destacar que, la falta de claridad es distinta al relleno abusivo de los espacios en blanco, dado que mientras la primera hace referencia a un aspecto o presupuesto formal de los títulos ejecutivos en general; la segunda es asunto que debió proponerse como excepción cambiaria.

Bajo la línea de pensamiento que viene anotada, no comparte el juzgado la postura sobre la ausencia del presupuesto de claridad del título valor y contrario a tal consideración, reiteramos se estima plenamente satisfecho.

Respecto a la tercera censura que formula el recurrente, no se encuentra dentro de las que puedan ser atendidas mediante recurso de reposición, ya que de ninguna manera puede el juzgado establecer si la digitalización se surtió directamente del original, se tomó de una copia simple o su aportación no se realizó con la calidad necesaria; de modo que si lo pretendido por el extremo ejecutado es que se le exhiba el título, tal pedimento deberá efectuarse con las excepciones formuladas.

Por demás, no puede pasarse por alto que al habilitarse y reglamentarse la formulación de la demanda por canales virtuales, también se facultó la aportación de títulos ejecutivos y valores; sin perjuicio de que aquel contra quien se opone solicite su exhibición dentro de las oportunidades legales, evento en el que el ejecutante manifestó en la demanda estar presto a atender cualquier requerimiento.

Corolario de lo expuesto, se negará el recurso horizontal propuesto por la sociedad ejecutada.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Negar el recurso de reposición presentado por la parte demandada en contra del mandamiento de pago, por las razones anotadas en la parte considerativa del presente proveído.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Firmado Por:
Raul Alberto Molinares Leones
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 015
Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **97301bfeca25669d7c5747852891855e407f0c359bc2a905e636a8220af0c30b**

Documento generado en 28/08/2023 01:22:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>